

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana. SUSCRIPCION PARA ESTA CIUDAD.



Se suscribe en la REDACCION establecida en la calle de Sto. Domingo.

Doces idem FUERA, FRANCO DE PORTE.

24 reales por trimestre.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ARTICULO DE OFICIO.

Número 842.

GOBIERNO POLITICO.

Con arreglo a lo que previene el artículo 5.º del Real decreto de 30 de junio último, inserto en el Boletín oficial de esta provincia número 81 correspondiente al día 8 de julio próximo pasado, se reunieron el día 15 del actual en el salón donde la Excm. Diputación provincial celebra sus sesiones, los señores:

- D. Manuel Ferreiro, diputado electo por el partido á que da nombre esta capital;
- D. Bernardo Pereira, por el del Carballino;
- D. Segundo Perez, por el de Allariz;
- D. Sebastian Alvarez, abad de Villarrubin, por el de Bande;
- D. José Estebez, por el de Celanova;
- D. Manuel Vazquez, abad de Carballeda, por el de Ribadavia;
- D. José Fernandez de Prada, por el de Trives;
- D. Agustín Mascareñas Corcuera, por el de Verin;
- D. Demetrio Luis Macía, por el de Viana;

Y despues de haber prestado ante el Sr. Gefe político, presidente, juramento de guardar fidelidad á la Reina (Q. D. G.) y á la Constitución del Estado, dicho señor presidente declaró instalada la nueva Diputación provincial de esta provincia. Lo que he dispuesto se inserte en el Bo-

letín oficial de la provincia para conocimiento de los habitantes de la misma. Orense 27 de agosto de 1847.—Nicolas de Castro.

Número 843.

El Excmo. señor Ministro de la Gobernación del Reino en 19 de julio último me dirigió la Real orden siguiente.

Habiendo dispuesto S. M. la Reina dar nueva forma y mayores dimensiones á la Gaceta de Madrid, órgano oficial del Gobierno en la prensa, se ha dignado recordar á V. S. con este motivo las diferentes Reales órdenes que se han comunicado, recomendando á los ayuntamientos la adquisición del Diario oficial, para que puedan tener con anticipacion y exactitud las disposiciones legislativas que emanan del poder ejecutivo. El Gobierno verá con agrado que V. S. fomenta, por los medios licitos que estan en sus atribuciones, la suscripcion á la Gaceta, y le excita para que la recomende a todos los pueblos de esa provincia que han de reportar algunas ventajas de esta suscripcion, abonándoles en todo caso su importe en los gastos voluntarios del presupuesto municipal. De Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia.

Lo que se inserta en el Boletín oficial de esta provincia para conocimiento del publico y de los ayuntamientos de la misma; debiendo añadir que el señor administrador de la imprenta nacional me remite el anuncio que á continuación se expresa. Orense 26 de agosto de 1847.—Nicolas de Castro.

Dispuesto por Real orden de 17 de julio último que la Gaceta de Madrid reciba en su parte material y de redaccion todas las mejoras que reclama su importancia, se publica dicho periódico desde 1.º de setiembre próximo en papel de excelente calidad y del tamaño de 34 pulgadas sobre 24; de manera que cada número contendrá doble texto que en la actualidad, á cuyo efecto se estrenarán

tres fundiciones de letra muy moderna sin que por ello se aumenten los precios de suscripciones, que continuarán siendo los mismos, á saber:

Provincias.	Canarias y Baleares.
Tres meses.....	90 rs. vn.....
Seis idem.....	180 id. id.....
Doce idem.....	360 id. id.....

Se admiten suscripciones en el despacho de la imprenta nacional y en todas las administraciones y estafetas de correos del Reino.—El administrador de la imprenta nacional, *Eugenio de Ochoa*.



Por la Direccion general de Loterías, timbre y demas ramos unidos se dice á esta Intendencia con la fecha inserta lo siguiente.

El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Direccion general con fecha 12 de diciembre de 1847 la Real orden que sigue.—He dado cuenta á la Real (Q. D. G.) de los expedientes promovidos por la suprimida Direccion de Rentas estancadas con motivo de la resistencia que varios comerciantes y Juntas de comercio han opuesto á que se lleven á efecto los artículos de la Real cédula de 12 de mayo de 1824 que tratan del papel que ha de emplearse en los libros y negocios y documentos mercantiles, apoyando sus reclamaciones en la falta de cumplimiento que desde su origen tuvieron dichos artículos, y mas señaladamente en que los contemplan derogados por el código de comercio publicado con posterioridad. Enterada S. M. y considerando que la indicada Real cédula es una disposicion tributaria que no pudo derogar el código de comercio formado solo para fijar las condiciones de los negocios y personas que en ellos intervienen pero que sin embargo hay necesidad de distinguir entre los autos de comercio que pasando á la pública circulacion deben ir revestidos de formalidades que los garantizan y pongan al nivel de los que se emplean por las demás clases de la sociedad, y los que no saliendo del círculo de los escritorios se hallan legalmente constituidos con la intervencion que ejerce en ellos la autoridad civil, ha tenido á bien declarar de conformidad con el dictamen de las secciones de Gracia y Justicia, Comercio y Hacienda del Consejo Real:

- 1.º Que la Real cédula de 12 de mayo de 1824 se halla en todo su vigor no obstante la falta de cumplimiento que varios de sus artículos han tenido, y sin embargo de haberse publicado con posterioridad el código de comercio.
- 2.º Que en virtud de la misma Real cédula y de la ley de 26 de mayo de 1835, los comerciantes estan obligados á usar del papel sellado y de los documentos de giro que respectivamente correspondan, en los contratos de fletamentos y de seguros de buques, en los denominados á la gruesa y sus pólizas, en los conocimientos á la orden y en las pólizas de contratos á la gruesa estendidos á la orden.
- 3.º Que los contratos de fletamentos y pólizas de los mismos, se estendan en el papel sellado corres-

pondiente con arreglo al artículo 70 de la citada Real cédula, y no obstante lo prevenido en el 30 de la misma.

4.º Que no se moleste á los comerciantes para el cobro del papel ó documentos que hasta el dia hayan dejado de emplear, mediante á que no es culpa de los mismos el que se haya permitido por tan largo tiempo la falta de cumplimiento en que ha estado la espresada Real cédula.

5.º Que continúe en suspenso el artículo 50 de la misma Real cédula relativo al papel en que deben estar los libros de los comerciantes, interin el Gobierno presenta á las Cortes el oportuno proyecto de reforma de la espresada Real cédula. De Real orden to digo á V. S. para su noticia y que disponga su exacta observancia.—Lo traslado á V. S. á los mismos fines y para que disponga se inserte en el Boletín oficial de esa provincia encargando su mas puntual cumplimiento.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de agosto de 1847.—Mariano de Zea.

Publiquese en el Boletín oficial de la provincia para conocimiento del público. Orense 24 de agosto de 1847.—Felipe de Ariño.

ARTÍCULO DE OFICIO
NÚMERO 845.

Juzgado de primera instancia de Bande.

Don Antonio Rubin, teniente alcalde de la cabeza de partido de Bande y su distrito en la provincia de Orense, que hace de juez de primera instancia en los autos de que se hará mención á falta del propietario é inhibicion del alcalde constitucional, &c.—Habiendo como se ha mandado de D. José Peña Isabathibara y como ha mandado de San Payo de Araujo, alcaldía de Jueves de este partido de Bande, acordada en julio del año pasado de 1826 abintestato por la justicia de aquella antigua jurisdiccion de Araujo se procedió á la formacion de inventario de su herencia, al que se presentaron como acreedores los siguientes:

- D. José y D. Diego Lopez, como herederos del difunto abal de Cadonga D. Miguel Francisco Diaz.
- D. José Garcia Caballero, abad del valle de Riocaldo.
- D. Lucía Fernandez, vecina de Acededo, como heredera de su cto D. José Rodriguez, abad que fue de Manin.
- D. José Pedro Parada, abad de San Mamed de Sobreganade.
- Dr. D. José Estevez, médico de la villa de Celanova.
- D.ª Josefa Labarro, viuda de D. Alonso Bobo de Orense.
- Antonio Fernandez Araujo, de San Gines de Lobera.
- Juan Gonzalez, de San Payo de Araujo.
- D. Francisco Javier Tejada, abad de San Juan de Bandin.
- El Padre Antonio José Alvarez Pereira, vicario de Cobelaine, reino de Portugal á habilitado.
- Manuel Gonzalez Ramon, de idem idem idem.
- Jacinto Antonio Leiro, maestro cantero de Santa Maria de Bora en Pontevedra.
- D. Juan Antonio Fernandez Lopez, vecino de Means.

D. José Carlos Lopez, de Calles de Ránsh.
 D. José Carlos Fernandez Lopez, vecino de To-
 rey, reino de Portugal.
 D. Mantel Lareu, capellan que fue del difunto
 abad de San Payo.
 D. Domingo Antonio Pose de Lamas, de la
 ciudad de Santiago.
 D. Francisco Peña, vecino de la parro-
 quia de San Salvador de Sofar, jurisdicción de
 la Bergantinos.
 D. Domingo Perez, sacador, vecino de San
 Payo de Araujo.
 D. Fernando Gonzalez, teniente cura en va-
 cante que fue de dicha parroquia de San Payo.

Cuyos autos de inventario y concurso han para-
 lizado hasta ahora que por D. Ceferino Lahartin,
 actual abad y cura párroco de dicho San Payo de
 cuyo beneficio ha poco se posesionó, se han repro-
 ducido en este juzgado; saliendo á ellos como arre-
 dor de mejor derecho, pidiendo el importe de la
 tasa que se hizo de los desperfectos y lo que ha
 quedado, debiendo á la fabrica de la iglesia el Don
 José Peña: á lo cual, con dictamen de asesores en
 17 del corriente agosto he proveido auto, mandando
 que en adelante de posteriores determinaciones se citasen
 en plaza á todos los acreedores arriba citados
 por medio de los Boletines oficiales de las cuatro
 provincias de Orense, Lugo, Pontevedra y Coruña,
 en fin de que concitáren en esta cabeza de partido
 y estubiera del que autoriza el día 27 de setiembre
 próximo venidero, para que reuniéndose en junta,
 se oyeren su derecho presente, por sí ó por me-
 dio de procurador, deliberasen con vista de ante-
 cedentes lo que les pareciese. Para que tenga efecto
 lo mandado, y llegue á noticia de todos los acreedo-
 res, cuando por su fallecimiento sus hijos y here-
 deros, y mas que se cumpla con derecho á la
 citada herencia, libran el presente Pido y ruego á
 los señores alcaldes constitucionales, de cuyos dis-
 tributos seán los acreedores expresados, que tan
 pronto recibian los Boletines oficiales en que se
 inserte este anuncio, se lo hagan á entender para
 que no aleguen ignorancia; en la inteligencia que
 pasado el día señalado, si no se presentase por sí ó por
 medio de procurador con poder bastante, se cele-
 brara la junta con los que lo hagan, continuara el
 expediente sin mas citarles, y les parará el perjuicio
 que haya lugar. Bando y agosto 18 de 1847.
 Antonio Rubin. Por su mandado, Juan Rivus
 y Aren.

**Continúa la Instrucción para promover y ejecutar
 las obras públicas de caminos, canales y puentes.**
 Por lo demas, el Ministro que suscribe, dispuesto
 á secundar eficazmente la generosa solicitud con
 que V. M. se complace en promover las empresas
 útiles, alarga el convencimiento de que en fomen-
 tarlas, en animar á los especuladores que las tomen
 á su cargo, se procura al Estado un elemento de
 poder que robustece su crédito y aumenta sus re-
 cursos: pero se halla igualmente persuadido de que
 esta misma protección, se convertiria en un princi-
 pio de ruina si la prudencia no hubiese de regu-
 larla. Una triste experiencia ha demostrado en

electo, que emprender las obras públicas sin ha-
 berlas meditado detenidamente, es malgrar los
 recursos de los pueblos, retraer para lo sucesivo á
 los accionistas y empresarios capaces de empre-
 derlas con mejor fortuna; ocupar los proyectos
 químicos á la administración, y hacerle sufrir las
 consecuencias de la ciega inconsideración de los que
 se han propuesto realizar un imposible.

Por eso se determinan en la nueva Instrucción
 los tramites por donde deben pasar los proyectos
 de las obras públicas para que recaiga sobre ellos
 la Real aprobación de V. M. sin olvidar tampoco
 las garantías de acierto que conviene acompañen á
 los de menor cuantía, para cuya aprobación están
 autorizados los Gotes políticos por la ley de 8 de
 enero de 1845.

Los expedientes formados de este modo no po-
 drán ofrecer dificultades para su resolución, y aun
 cuando ocurrieren algunas, será fácil vencerlas
 con la explanacion metódica de los mismos pro-
 yectos que estarán apoyados en documentos oficiales
 y patentizaran las ventajas de la obra, la naturaleza
 de sus construcciones, el cálculo de los gastos que
 debe ocasionar y los arbitrios necesarios para cu-
 brrilos. Estos datos determinan la ejecución de un
 modo preciso, y emprenderla conforme á ellos,
 será poner en armonia la inteligencia que obra y
 dirige, con la autoridad que la protege é inspeccio-
 na sus operaciones; será conducir á su término las
 empresas útiles sin los entorpecimientos que por-
 den malograrlas; será en fin evitar la confusión y
 la anarquía en un ramo tan esencial de la admini-
 stracion pública.

Tales son, Señora, las razones en que se fonda
 el Ministro que suscribe, para proponer á V. M. que
 digno aprobar el adjunto proyecto de decreto Ma-
 drid 10 de octubre de 1845. Señora. A. L. R. B.
 de V. M. Pedro José Pidal.

REAL DECRETO

Atendiendo á las razones que me ha expuesto
 el Ministro de la Gobernacion de la Península, he
 venido en aprobar y mandar que se observe la
 adjunta Instrucción para promover y ejecutar las
 obras públicas.
 Dado en Palacio á 10 de octubre de 1845.
 Está rubricado de la Real mano. El Ministro de
 la Gobernacion de la Península, Pedro José Pidal.

INSTRUCCION

PARA PROMOVER Y EJECUTAR LAS OBRAS PÚBLICAS.
CAPITULO I.
**De las obras públicas en general, y de los agentes
 especiales de este ramo de la administración.**

Artículo 1.º Para los efectos de esta Instrucción
 se consideran como obras públicas los caminos de
 todas clases, los canales de navegacion, de riego y
 de desagüe, los puertos de mar, los faros y el dese-
 camiento de lagunas y terrenos pantanosos en que
 se interesen uno ó mas pueblos, la navegacion de
 los rios, y cualesquiera otras construcciones que
 se ejecuten para satisfacer objetos de necesidad ó
 conveniencia general.

Art. 2.º Bajo el nombre genérico de obras públicas se comprenden las del Estado; las provinciales y las municipales; y la denominación de cada una de ellas se determina por la procedencia misma de los fondos con que han de realizarse.

Las excepciones de esta clasificación se fijarán por el Gobierno en los casos especiales que ocurrieren, y entonces podrán tener lugar las obras mixtas: esto es, las que reclamadas por el interés general ó por circunstancias particulares de utilidad pública, han de costearse simultáneamente por el Estado y las provincias ó los pueblos.

Art. 3.º Las obras del Estado con un carácter general y de utilidad común, se costean con fondos del Tesoro público, y se ejecutan bajo la inmediata inspección y vigilancia del Gobierno por medio de la Dirección general y del Cuerpo de Ingenieros del ramo.

Art. 4.º Las provinciales, ó interesan á la generalidad de una provincia, ó á determinadas comarcas y municipalidades.

En el primer caso se costean las obras con los arbitrios ó recursos generales de la provincia; en el segundo con los de los pueblos á quienes mas directamente interesan.

Estarán unas y otras al inmediato cuidado de las respectivas autoridades administrativas, y se ejecutarán bajo la dirección de los Ingenieros destinados á los distritos y á las provincias.

Art. 5.º Así las obras nacionales, como las provinciales y municipales pueden realizarse por empresa, por contrata ó administración. En las obras por empresa, la administración contrata con particulares la ejecución de las obras, cediéndoles en pago los productos y rendimientos de las mismas; y cuando estos no sean suficientes, estipulando concesiones en compensación de la industria de los empresarios ó del capital que adelanten, de lo cual resultará á su favor en los mas de los casos un privilegio por tiempo determinado.

En las obras por contrata, la administración satisface en plazos fijos las cantidades estipuladas por las obras que los contratistas se obligan á ejecutar en un tiempo dado y bajo condiciones determinadas.

En las obras por administración, el Gobierno, las provincias ó los pueblos son los ejecutores encargados directamente de todas las operaciones, así facultativas como económicas, en la forma que determinen las leyes y los reglamentos é instrucciones del ramo.

Art. 6.º Deberán preferirse las contratas siempre que haya fondos suficientes para satisfacer á los contratistas el importe de las obras que vayan ejecutar lo á plazos fijos y de un modo positivo, bien procedan los recursos de arbitrios impuestos al intento, ó de cualesquiera otros medios conocidos.

Art. 7.º Las empresas promovidas por particulares, en tanto serán aceptables en cuanto la importancia y vasta extensión de las obras proyectadas exijan considerables sumas que la administración no se halle en estado de aprontar, pero que puede suplir y enajenar por medio de concesiones.

Art. 8.º La ejecución de una obra por empresa puede proponerse por empresarios ó compañías particulares, y tambien por las provincias y los pueblos interesados.

En el primer caso deben los empresarios acompañar á su propuesta:

1.º Los planos generales y particulares necesarios á la cabal inteligencia del proyecto.

2.º El presupuesto circunstanciado de su coste.

3.º La memoria facultativa del mismo proyecto con la descripción detallada de las obras, y la explicación del sistema ó métodos de construcción que han de emplearse, especialmente para vencer las dificultades que en su ejecución se ofrezcan; y el señalamiento de las épocas ó tiempo en que han de darse concluidas en parte ó en todo.

4.º Y por último, la apreciación de las ventajas y utilidades que deben resultar de la ejecución de la empresa propuesta.

En el segundo caso, ó cuando la administración juzgue conveniente tomar la iniciativa, el Gobierno proveerá lo necesario para formalizar los trabajos expresados si se refiriesen á obras nacionales: respecto de las obras provinciales y demas que esten á cargo de las autoridades locales, procederán estas en el modo y forma que se establece en los respectivos artículos de esta Instrucción.

Art. 9.º Cuando por ser las empresas de mucha consideración exijan crecidos gastos para la presentación previa de los datos mencionados en el artículo precedente, y hubiere algunos otros por donde conste la posibilidad de llevarlas á efecto, y sean conocidas sus ventajas, ó bien prometan fundadas esperanzas de utilidad, se autorizará por el Gobierno á los particulares que lo soliciten y ofrezcan da suficiente garantía de su cumplimiento, para que formen el proyecto correspondiente con los documentos citados en el art. 8.º

Art. 10.º El Gobierno se reservará en estos casos el derecho de aumentar ó disminuir las concesiones, cuando formalizados sus proyectos y comparados su costo y utilidades, resulten estas insuficientes ó excesivas, á fin de evitar por este medio que se debilite el estímulo del interés individual, ó se ocasionen perjuicios á los pueblos en particular, ó al Estado en general.

Art. 11.º Mientras no se resuelva definitivamente sobre la clase de propuestas de que trata el artículo anterior, tampoco se admitirán otras nuevas sobre los mismos proyectos; pero si al tiempo de examinar las primeras se presentasen algunas que por sus conocidas ventajas debiesen ser preferidas, se hará la adjudicación mediante el abono á los primeros proponentes del gasto que les hubiese originado la formación del proyecto con todos los datos exigidos.

Art. 12.º La redacción de todos los documentos que constituyen un proyecto de esta clase deberá arreglarse á los modelos que prescriban las instrucciones ó prácticas observadas por la Dirección general y Cuerpo de Ingenieros de Caminos.

Art. 13.º La concesión de las empresas de toda clase de obras públicas se otorgará por el Gobierno en el modo y forma que para cada caso se estime conveniente.

(Se continuará.)